

lo de nobleza á la vinculación, y ésta se concedía fácilmente por los reyes mediante el pago de una cantidad, abundaron ricos propietarios que obtuvieron el título de Duques, Marqueses, etc., etc., vinculando sus bienes. Por otra parte la Iglesia con sus catedrales, monasterios, conventos, cofradías, fundaciones piadosas, capellanías, etc., adquirió grandes propiedades destinadas al culto, á los frailes ó monjas, ó sostenimiento de reuniones ó colegios, etc., etc. La propiedad de la Iglesia adquirida por donaciones entre vivos, por testamentos y por los demás medios jurídicos, era clasificada por el derecho canónico de la manera siguiente: I. Bienes que se reputaban sagrados y por lo mismo segregados del comercio, como templos, cementerios, vasos sagrados, paramentos y demás objetos destinados al culto.—II. Bienes que consistían en verdaderos impuestos que pagaban los fieles, como diezmos, oblações, primicias, derechos parroquiales, etc.—III. Beneficios eclesiásticos, que consistían en el derecho que tenían los eclesiásticos en virtud del oficio que desempeñaban (curatos, obispados, etc.), para percibir las rentas ó frutos de los bienes eclesiásticos anejos al servicio ó Iglesia en que el clérigo desempeñaba el oficio ó encargos respectivos.—IV. Bienes destinados á colegios ó institutos de beneficencia ú otros establecimientos eclesiásticos, como seminarios, hospitales, casas curales, etc., etc.—V. Bienes raíces, rústicos y urbanos y capitales impuestos sobre ellos ó á censo y adquiridos por donación, herencia, contratos entre vivos, mercedes del rey, decretos del legislador, etc., y destinados al culto en general ó en particular á determinada Iglesia, convento, monasterio, solemnidad de culto. De estos bienes, unos administraban los Obispos como jefes del clero secular, y otros los conventos por medio de sus depositarios, concejos, provinciales, etc., como directores del clero regular, y entre estos figuraban las dotes de las monjas, que eran los capitales que al profesar llevaban las monjas y adquirían los conventos.—VI. Bienes de cofradías, capellanías y otros gravámenes sobre bienes de comunidades ó rentas sobre bienes públicos. Las cofradías eran corporaciones ó congregaciones de legos con algún objeto de culto ó religión, y no podían enajenar sin consentimiento del Obispo y del Gobierno Civil; excepto las anexas á los conventos, que podían enajenar con licencia del superior del convento; debiendo advertirse que estas cofradías tenían y administraban bienes por medio de sus ecónomos, muebles y raíces destinados al culto de tal santo, á determinada solemnidad ó determinado objeto que se reputaba útil y pío, siendo por lo mismo personas ó corporaciones con goce de derechos civiles. Las capellanías eran fun-

daciones, esto es, la dedicación y vinculación de ciertos bienes raíces ó capitales hechos por contrato ó testamento y á favor de determinadas personas, con la carga de que sus productos se invirtieran en decir misas á beneficio del alma del fundador ó de otra persona; debiendo intervenir los obispos en la administración de la mayor parte de estas fundaciones.<sup>1</sup> Finalmente, por el título primitivo de erección, ó sea por las *mercedes de tierras* á los pueblos de indios y á los particulares, ó por el título privado de adquisición, ciertas propiedades estaban afectas á prestar determinado servicio al culto religioso, ó á la instrucción religiosa, y el clero intervenía naturalmente en la recaudación y distribución de esas pensiones ó gravámenes, y además tenía el mismo Clero derecho en las rentas del Estado, ya en virtud de préstamos que le había hecho, ya en virtud de concesiones del Gobierno. En general los bienes eclesiásticos no podían enajenarse sino en casos excepcionales y previas ciertas solemnidades muy embarazosas. (Reinfestuel, De Rebus eclesiast. alicuandis § 1°.)

12. Al lado de los bienes del Clero que hemos enumerado, existían los bienes del Estado, de los municipios, de otros establecimientos civiles, los de comunidad de indios y censos de los pueblos. Los bienes del Estado eran: I. Los edificios, palacios, cuarteles, maestranzas, vapores, etc., destinados á las autoridades y oficinas, adquiridos todos en virtud de leyes y cédulas que mandaron edificar ó construir dichos edificios y atribuir el terreno respectivo á la Corona de España, disposiciones que pueden verse en la «Recopilación de Indias,» «Cedulario de Puga,» y colecciones posteriores. Hasta hoy no se ha formado el

<sup>1</sup> Las capellanías se dividían en laicas (ó laicales, mercenarias y profanas), colativas y gentilicias. Las primeras, fundadas sin intención eclesiástica y que no daban aptitud al beneficiado para poder ordenarse (pues en general se requería patrimonio en el que aspiraba á recibir las órdenes eclesiásticas, eran simples mayorazgos en favor de determinada línea, con el gravamen de mandar decir las misas consignadas en el título de fundación. Las capellanías *colativas* ó eclesiásticas son las que se instituían con autoridad de la Iglesia y servían de título al beneficiado para ordenarse, correspondiendo designar al beneficiado por la capellanía el patrono designado en la fundación, y sirviendo los productos de aquella para sostener al capellán ó sacerdote ordenado. Las capellanías *gentilicias* son lo mismo que las colativas, con la diferencia de que el patrono ó el que ha de designar al beneficiado, es la persona de cierta y determinada familia designada por el fundador. Como las capellanías importaban vinculación, no podían fundarse sin licencia del soberano. (Ley 6, tit. 12, lib. 4°, Nov. Recop., Resolución 20. Febrero 1796 y 20 Setiembre de 1799.) La cédula de 29 de Setiembre de 1798, que permitió la desvinculación de bienes, impidió también la fundación de capellanías; pero en México la ley de 7 de Agosto de 1823, al adoptar la ley española de 27 de Setiembre de 1820, la derogó en la parte que prohibía fundar capellanías, dejando vigente la 18, tit. 15, lib. 1°, Nov., que grava en un 15 por 100 toda vinculación.



inventario completo de esos bienes, aumentados notablemente á consecuencia de las leyes de nacionalización. II. Los bienes de temporalidades y otros bienes raíces adquiridos por títulos comunes de derecho, que han sido enajenados ó destinados á establecimientos públicos, como los bienes de la Compañía de Jesús, de la Inquisición, minas de cobre, ferrocarriles, telégrafos, salinas del Peñón y otras, etc., etc.<sup>1</sup> III. Los baldíos, las minas, los bienes mostrencos, que siempre se han considerado como bienes del Estado, para el efecto de enajenarlos ó distribuirlos á los particulares con arreglo á leyes especiales (véanse las notas al párrafo ó núm. 21). IV. Finalmente, los impuestos, contribuciones, rentas ó monopolios establecidos por las leyes para los gastos públicos. Además del Estado, los municipios tenían bienes propios que consistían no sólo en los impuestos (llamados arbitrios), sino en bienes raíces y capitales á censo (propios), adquiridos por mercedes reales ó por otros títulos de derecho común, y cuyos productos estaban consagrados al sostenimiento de autoridades, escuelas, culto religioso, etc. (art. 20 y siguientes, Ordenanza de Intendentes, que no hizo más que recopilar leyes antiguas).

Los pueblos no sólo tenían sus bienes, sino los que constituían su fundo legal, pues según la legislación española, podían establecerse pueblos no sólo en terrenos baldíos, sino ser expropiados los particulares cuando se trataba de fundar pueblos, á los que debía señalarse un fundo legal ó dotación de territorio para casas, y además, egidos ó terrenos para pastos (Leyes 1ª, tít. 25, lib. 7, Nov. Recop.—Con las de 4 de Junio de 1687, 12 de Julio de 1695, 14 de Mayo de 1811, y título 3, lib. 6, Recop. de Ind.) Por último, los indios poseían terrenos que cultivaban en común mediante el reparto anual que se hacía por determinadas autoridades en forma de arrendamiento, y los productos de estos, así como los demás bienes ó hipotecas de las comunidades de indios, entraban en un fondo común que se aplicaba á pago de tributos, gastos de culto, escuelas, etc., etc. Estos terrenos y estos bienes se llamaban de *comunidad*, de *parcialidades*, de *indios* («Art. 44, Ordenanza de Intendentes, ley 31, tít. 4, lib. 6, Recop. de Ind., y muchas concordantes y relativas del mismo Código. La instrucción de la Audiencia de México de 23 de Febrero de 1781 mandó observar los decretos virreinales de 20 de Julio de 1783, 23 de Diciembre de 1780, y le-

<sup>1</sup> Según el art. 159 de las Ordenanzas de Intendentes, los Reyes de España sucedieron á los Emperadores indios en el dominio de las salinas que debía explotar por su cuenta la Corona de España, dejando á los indios *el libre uso de solo las pocas que necesitaren* y beneficiaren mediante el pago de una pensión.

yes de Indias, para que no se ejecuten ventas, empeños, arrendamientos de los terrenos de indios, *ya sea los que estos poseen en común, ó en particular cada uno por herencia ú otro título, ya sea que esas enajenaciones y contratos sean entre los mismos indios, y muy especialmente los que se hagan con españoles ó dueños de haciendas ó pueblos, á no ser que esos contratos se hagan con licencia y aprobación del Gobierno, Audiencias y Juzgado de indios.*»)

La propiedad de estas comunidades, después del establecimiento del Gobierno federativo en México, fué objeto de varias reglamentaciones por parte de los gobiernos de los Estados; pero hasta las leyes llamadas de reforma, que luego estudiaremos, se fijó de una manera general la manera de suprimir esa propiedad en común que todavía existe.

13. Además, la ley 5, tít. 16, lib. 1ª, ordenó que los pastos, montes, aguas, serían comunes en las Indias á todos los vecinos de ellas que ahora son y después fueren, para que los puedan gozar libremente y hacer junto á cualquier sitio sus cabañas, traer allí los ganados, etc.; las leyes 6, 7, 8 y 14 del mismo título y libro, prevenían que cosechando el fruto quedaban comunes los pastos de la tierra, y que los montes de frutos silvestres fuesen también comunes; el bando de 18 de Julio de 1783 (Montemayor y Beleña) prevenía que á los arrieros no se cobrasen pastos. Como estas disposiciones pugnaban realmente con el derecho de propiedad privada, fué preciso que la Audiencia de México adoptase un temperamento que conciliase en algo dicha propiedad privada con esas leyes, y al efecto dictó el auto acordado de 22 de Mayo de 1756, que previno no se permitiese perjudicar á los propietarios al usar del derecho concedido en dichas leyes; pero que los propietarios á su turno no impidiesen el entrar á sus montes para cortar la leña y madera que los pueblos necesitasen para usos propios y de sus familias, reparación de jacales é iglesias. Esta especie de comunismo territorial quedó por fin derogado por la ley de 8 de Junio de 1813, que permitió acotar todas las propiedades particulares y venderlas y destinarlas libremente á los usos que quisieren sus propietarios, sin más limitación que las servidumbres de aguas que existen de abrevaderos ó cañadas y caminos. Entre estas limitaciones está la consignada en cédula de 18 de Noviembre de 1803 y Real Orden de 22 de Junio de 1807, según la que el vecindario de una ciudad es el propietario de las aguas que se conducen por cañerías públicas para su servicio, y por lo mismo, siempre que la necesiten deberán quedar privados de ella los particulares que tienen mercedes, devolviéndoles lo que pagaron por ellas, y debían repartirse todos los baldíos, y reducirse á domi-



nio particular los bienes comunes, excepto los egidos de los pueblos.

14. Reasumiendo lo expuesto, tenemos que el territorio, la propiedad, los bienes, sobre todo inmuebles, de la Nación mexicana, estaban distribuidos en bienes vinculados ó de Mayorazgo, bienes de comunidades de indios, bienes de la Iglesia secular y regular, bienes de cofradías ó congregaciones de legos para fines religiosos, bienes de capellanías, bienes destinados directamente al culto, bienes del Estado, bienes de los municipios, bienes dedicados á objetos de utilidad pública no comprendidos en los anteriores, y finalmente, bienes particulares, debiendo advertirse que la mayor parte de todos los bienes del país pertenecían á esas personas morales llamadas Iglesia, comunidades de indios, etc., ya directamente, ya reportando los bienes raíces de particulares, hipotecas ó censos á favor de dichos institutos. Las leyes de reforma trasformaron por completo este sistema siguiendo el movimiento, la evolución natural y secular que en todos los países ha seguido y tendrá que seguir la propiedad, siempre que causas de un orden inferior no vengán á perturbar el desarrollo gradual y espontáneo de las sociedades. En efecto, hemos visto que la forma primitiva de la propiedad fué el comunismo de la tribu, que la apropiación individual no apareció sino cuando las leyes inflexibles de la división del trabajo, fruto necesario del aumento de población, cambiaron la tribu nómade en pueblo industrial, y el pueblo industrial trajo consigo las artes, la agricultura, los oficios públicos, la especialización de funciones sociales, en una palabra, cierta autonomía ó libertad en las clases y en los individuos, que no se compadece con el poder absorbente del Estado, ni con las formas comunistas y patriarcales de la propiedad. Hemos asistido al momento histórico en que esta revolución económica substituyó á la intervención de la sociedad toda en las transmisiones de la propiedad, el símbolo de la emancipación, reminiscencia del estado patriarcal de la propiedad. Hemos seguido paso á paso las trasformaciones que iba sufriendo el derecho de propiedad, á medida que las libertades y acrecimiento sociales, pugnando por desembarazarse de la *emancipación*, vestigio de sistemas arcaicos, llegaron hasta la simple solemnidad de la *tradición*, única reliquia de la antigua constitución de la propiedad. Hemos presenciado el paralelismo perfecto que hay entre la emancipación del hombre de los poderes públicos y la individualización de la propiedad, es decir, que á medida que el hombre depende menos del Estado, la propiedad pierde su carácter de común, de pública, de feudal, para convertirse en propiedad individual y libre, acreciendo el número de tierras de propiedad privada

y decreciendo la lista de bienes públicos ó comunes, así como las leyes que directamente intervienen en el uso de la propiedad privada. Todo este desenvolvimiento gradual se explica fácilmente, pues á medida que el Estado absorbe mayor suma de libertad ó actividad de los individuos, necesita tener más elementos de dominio, y ningún elemento más poderoso que la propiedad, pues es el supremo factor de todas las actividades públicas y privadas de una sociedad. Donde quiera que el individuo está sometido en sus creencias políticas, religiosas, morales, á la voluntad de un Rey, de un Pontífice ó de una Iglesia, ese Rey, ese Pontífice ó esa Iglesia, depositarios de las creencias de los individuos, son instituciones absorbentes, dotadas de poder y de medios de acción eficaces para ejercer sus funciones, y entre esos medios de acción está la riqueza; donde quiera que el individuo se emancipa política, religiosa y moralmente de aquellos poderes, donde quiera que quiere gobernarse por sí, pensar por sí, dirigirse moralmente por sí mismo, por su propia razón, el poder de aquellas instituciones pierde gran parte de su prestigio, de su autoridad, y juntamente y por consiguiente forzoso, parte de sus preeminencias sociales, de sus privilegios, de sus bienes. En consecuencia la propiedad, el derecho de propiedad, tendrá inevitablemente que seguir las leyes que presiden el desarrollo de las sociedades, y cuando estas en su progreso lleguen á proteger la autonomía personal ó la independencia privada, la propiedad tenderá á individualizarse, á emanciparse de todo comunismo, de toda traba, de toda tutela, como el individuo se ha emancipado de idénticas tiranías en sus creencias, en su actividad, en su trabajo y en su acción política. Hay por lo mismo grande insensatez en inventar teorías y sutilezas para hacer frustráneas las naturales consecuencias del desenvolvimiento social; dada la causa, es impotente el hombre para evitar su efecto; y si la causa de la desaparición de la mano muerta, del fideicomiso, del Mayorazgo, de la riqueza inmoviliaria de la Iglesia y corporaciones, radica en la emancipación intelectual, económica y política de los individuos, y esta emancipación es inevitable, dadas ciertas condiciones sociales, es demencia pretender subordinar á dogma antiguo y sistemas arcaicos las necesidades de un nuevo orden social.

15. La división jurídica de los bienes, respondiendo por lo expuesto á nuevas concepciones sobre el derecho de propiedad, tiene que adaptarse á ellas y abandonar antiguos tecnicismos inútiles en el movimiento de la actividad económica moderna. Hoy el hombre santifica con sus esfuerzos individuales y no con el óleo de fórmulas y ritos sacramentales ni con el prestigio de la tradición el derecho de propiedad,



que en tanto se reputa sagrado en cuanto que lleva impreso el sudor del trabajo material ó el sello del esfuerzo intelectual. Por estos medios el hombre se ha apoderado de las fuerzas desconocidas de la naturaleza, ha extendido el horizonte de la industria, encontrado en la tierra depósitos ocultos de riqueza y multiplicado maravillosamente la nomenclatura de las cosas dotadas de valor, á la vez que ha aumentado la acción productora y las explotaciones útiles de los objetos materiales. El catálogo y nomenclatura de sus bienes no afecta al derecho ó á la legislación, sino en tanto que la diferencia entre aquellos trae consigo diferencias que influyen en los procedimientos y fórmulas jurídicas para más garantizar el derecho de propiedad é impedir su amortización y monopolio. Estos, y sólo estos, son los objetos que se propone el derecho al fijarse en la diversidad natural de las cosas materiales para clasificarlas respecto de sus condiciones jurídicas, pues esa diversidad natural influye muchas veces en que sean ó no susceptibles de ciertos derechos, de ciertas garantías, de ciertas ritualidades jurídicas, así como en que sea nociva ó no su acumulación ó estancamiento legal. No es posible, por ejemplo, fijar en los bienes muebles las mismas garantías de la publicidad de la transmisión, enajenación, etc., que en los inmuebles, sin embarazar bárbaramente el comercio; no es posible, por la misma naturaleza física de los bienes muebles y por su objeto de apropiación, que estos sean susceptibles de servidumbres, esto es, de inmovilizarse para determinado servicio; no es posible que se radique tan certera é individualmente el dominio en los bienes fungibles como en los no fungibles; no es posible el comercio humano sin un espacio libre, irreductible al dominio privado en que se localicen las funciones comunes de todos los asociados, ya sea en el orden mercantil, político ó moral, y de aquí la necesidad de que existan bienes comunes; no es peligroso que el Estado y las corporaciones alleguen á su turno capitales mobiliarios, porque estos ni pierden su carácter de libre circulación con el hecho de ser poseídos por esas entidades, como sucede con los inmuebles, ni son susceptibles de grandes monopolios. Hé aquí, pues, la base racional de la división jurídica de los bienes materiales, fundada, como hemos dicho, no en las tradiciones del origen primitivo, de comunidad inicial y carácter sacramental del derecho de propiedad, sino en la diversidad real y positiva de las cosas, en tanto que ella influye en la diversidad de medios jurídicos para la adquisición, transmisión y conservación de los derechos que se pueden tener en las cosas dotadas de valor y susceptibles de entrar á la circulación económica.

(Continuará.)

Jacinto Pallares.

## LAS SOCIEDADES MERCANTILES.

### I

#### LOS TRES TIPOS FUNDAMENTALES.

A los ojos de la sociología, la *sociedad*, en su acepción más lata, es una colección de entidades que cooperan de un modo permanente: crece como los seres organizados, aumentando de volumen, diferenciando sus partes é individualizando las funciones de estas; el resumen de la vida de sus elementos es la vida de ella, como el resumen de la vida de las celdillas del cuerpo humano es condición de la vida del hombre, y sus unidades materialmente aisladas, cooperan debido á fuerzas intelectuales.

En el mundo entero puede afirmarse que los hombres forman todos una inmensa sociedad cuyas partes, separadas á veces por millares de kilómetros, se ligan, sin embargo, como afirma la Economía Política, gracias á *los cambios*, y cooperan para verificar estas cuatro grandes labores: la producción, la repartición, la circulación y el consumo.

En esta gran sociedad, se determinan agrupaciones especiales: reuniones de hombres con las mismas ideas religiosas forman sociedades como la cristiana, que consta, según Poirel, de 456 millones de individuos, y la bondista con 486 millones, cooperando para perseguir un ideal; de un modo semejante, para llenar el ideal de la organización política, se constituyen Estados, y aunque en ellos puedan notarse grandes heterogeneidades étnicas, lingüísticas ó de cualquiera otra especie, no obstante, quedan ligados, en la gran sociedad humana, debido á *los cambios* internacionales.

En las sociedades políticas se determinan á su vez agrupaciones de carácter menos extenso y que pueden tener dos tendencias predomi-